

ENSAYO BIBLIOGRÁFICO: *Los fundamentos político-económicos de las dictaduras y de las democracias.*

Ensayo bibliográfico de los siguientes libros:

Acemoglu, Daron y James A. Robinson (2006): *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*, New York: Cambridge University Press.

Boix, Carles (2003): *Democracy and Redistribution*, Cambridge: Cambridge University Press.

Przeworski, Adam; Álvarez, Michael E.; Cheibub, José Antonio y Fernando Limongi (2000): *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990*, New York: Cambridge University Press, 2000.

Vanhanen, Tatu (2003): *Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries*, London: Routledge.

Una de las cuestiones más debatidas y estudiadas, si no la más, en política comparada es la relativa a los orígenes de las democracias y de las dictaduras. Este asunto se ha estudiado desde distintas perspectivas, utilizando diferentes metodologías teóricas y empíricas y, para ello, se han diseccionado infinidad de procesos de democratización ocurridos en diversos países y momentos históricos. Sin embargo, pese a la abundante literatura existente sobre las causas y los mecanismos que explican la emergencia de los regímenes políticos y, en particular, de la democracia, aún hoy no existe un acuerdo en torno a unas mínimas claves analíticas que nos ayuden a entender por qué unos países transitan a la democracia mientras que otros permanecen bajo instituciones dictatoriales.

Una razón que puede parecer, a primera vista, bastante obvia de este desencuentro académico reside en las distintas definiciones de democracia y, por oposición, de dictadura que se han dado en la literatura. Tanto el concepto de democracia como su operacionalización empírica han sido objeto de una profunda discusión y, como resultado, los esfuerzos de clasificación del régimen político se han centrado en diferentes dimensiones del mismo. Sin pretender ser exhaustivos y considerando únicamente las propuestas más influyentes, algunos trabajos se han centrado en medidas sobre el grado de

protección de los derechos políticos y de las libertades civiles presente en cada país (por ejemplo, la base de datos de *Freedom House*); otros estudiosos del tema han apostado por una clasificación dicotómica basada en el principio de competición política y en la existencia de elecciones populares y competidas como mecanismo de elección del ejecutivo y el legislativo (Przeworski *et al.* 2000); en un tercer grupo de propuestas, como las derivadas de las diversas versiones del *Polity Project*, inicialmente dirigido por Ted Robert Gurr en los años setenta, se incluyen como indicadores del grado de democratización —además de la competición y la apertura en la elección del ejecutivo— la naturaleza limitada del gobierno (1). Si ni siquiera hay un acuerdo sobre la definición del objeto de estudio, no es de extrañar a priori que los trabajos sobre el cambio de régimen político hayan llegado a conclusiones tan dispares. Con todo, ésta no es la razón fundamental de la divergencia de posiciones en torno a este debate. Pese a las nociones alternativas de democracia, las clasificaciones empíricas disponibles producen los mismos resultados al catalogar de una manera casi idéntica las observaciones reales. Prueba de ello es que las correlaciones entre las distintas bases de datos de regímenes políticos —comparadas de dos en dos— suelen ser muy altas con independencia de los indicadores que se hayan utilizado para su construcción. Así pues, como se indica en uno de los libros reseñados en este artículo, aunque la clasificación de los regímenes políticos «parezca constituir un paso crucial porque todo lo demás depende de ésta (...) al final resulta que poco depende de la manera en que clasifiquemos los regímenes» puesto que, en cualquier caso, «otras clasificaciones hubieran generado los mismos resultados» (Przeworski *et al.* 2000: 10).

El objetivo de este artículo de revisión es estructurar las principales contribuciones académicas que se han aportado sobre los fundamentos políticos y socio-económicos de los regímenes políticos. En concreto, este artículo se centra en los debates recientes sobre los factores sociales y económicos asociados a la existencia de democracias, resaltando las diferencias y los puntos en común relativos a la metodología utilizada, las propuestas teóricas y los resultados empíricos de los estudios más influyentes. ¿Cuál es el papel del desarrollo económico en los procesos de democratización? ¿En qué medida las transformaciones en la estructura de los recursos materiales inciden en la probabilidad de transitar a la democracia? ¿Cuáles son los actores relevantes en la elección del sistema político? ¿En qué medida las condiciones económicas influyen sobre las preferencias de estos actores por un tipo de régimen

(1) Para medir esta dimensión de la democracia, la escala de Gurr codifica las constricciones efectivas a la acción del jefe del ejecutivo.

u otro? Éstas son las preguntas fundamentales que han guiado, en gran medida, la literatura sobre democratización desde la década de 1960. En las siguientes secciones se sistematizan las respuestas que se han dado en esta literatura y, en particular, en los libros que son objeto de discusión de este artículo.

Al margen de cuestiones normativas, analizar las fuerzas que impulsan y explican el establecimiento de un marco institucional democrático es relevante por varias razones substantivas. En primer lugar, en la medida en que las instituciones influyen en las decisiones políticas que tienen consecuencias distributivas para los intereses en conflicto, profundizar en los mecanismos del cambio institucional nos puede ayudar a entender mejor el grado redistributivo de las políticas. Por ejemplo, si la desigualdad incrementa las presiones populares de redistribución de la renta —que, supongamos, se hacen efectivas en democracia— al tiempo que aumenta las resistencias de los sectores más ricos a instaurar un sistema de corte más democrático, no es de esperar, entonces, que los niveles de redistribución más altos ocurran en condiciones extremas de desigualdad. Por muy intensas que sean las demandas de redistribución, la ausencia de mecanismos democráticos que agreguen dichas preferencias (como consecuencia, precisamente, del elevado grado de desigualdad) bloquea la incorporación de tales demandas. La hipótesis más plausible sería, por tanto, que la redistribución alcanzará sus cotas más altas en intervalos intermedios de desigualdad porque los grupos poderosos no tendrán tantas reticencias a abrir el proceso político en tanto que las presiones populares seguirán siendo considerables (2). Este argumento muestra, por otra parte, la importancia de las instituciones para los grupos sociales enfrentados en su lucha por satisfacer sus propios intereses. Es razonable pensar que estos grupos intentarán, en primera instancia, determinar las reglas de juego institucionales si éstas tienen consecuencias efectivas en las políticas redistributivas.

Un segundo motivo de por qué es relevante estudiar el tema que nos ocupa es que nos ayuda a comprender mejor cuestiones tan recurrentes en la literatura académica como los efectos del régimen político sobre el crecimiento económico o sobre otros indicadores socio-económicos como la educación y el crecimiento demográfico. En concreto, conocer los factores asociados a la probabilidad de existencia de los regímenes democráticos nos permite determinar en qué medida estos efectos son espurios, en el caso de que existan causas comunes detrás de las instituciones y de los resultados

(2) En los tramos más bajos de la desigualdad, al disminuir las reivindicaciones populares por la redistribución, es de esperar que el grado redistributivo de las políticas sea menor.

objeto de investigación. Como afirman precisamente los autores de uno de los libros aquí reseñados (Przeworski *et al.* 2000), es imprescindible examinar primero las dinámicas de selección del régimen político e incorporarlas en las ecuaciones de estimación de los modelos de crecimiento para llegar a conclusiones no sesgadas sobre el papel causal de las instituciones en el crecimiento económico.

A partir de la década de 1960, el estudio de la emergencia y consolidación de la democracia ocupa un lugar central en la agenda de investigación de la política comparada gracias a las aportaciones fundamentales de Seymour Martin Lipset (1959) y Barrington Moore (1966). Sus investigaciones pioneras han generado numerosas publicaciones posteriores marcando el inicio de dos líneas principales de análisis que han estructurado, en buena medida, el debate sobre la democratización (3). Una primera línea abarcaría todos los estudios de la teoría de la modernización que tratan de explicar la fuerte asociación, revelada por Lipset (1959), entre la existencia de instituciones democráticas y el nivel de desarrollo económico. El libro de Moore sobre los efectos de la estructura del sector agrario y las coaliciones de clase inicia el enfoque de las bases sociales de la democracia que busca en el equilibrio de poder y en las alianzas políticas entre clases la causa de la elección del régimen político.

Los libros que son objeto de discusión en este artículo, especialmente los de Acemoglu y Robinson (2006), Boix (2003) y Przeworski *et al.* (2000), responden a cuestiones no resueltas de ambas perspectivas académicas y, en el caso de los dos primeros, suponen un esfuerzo de integración y perfeccionamiento de los supuestos básicos e hipótesis teóricas formuladas por las distintas corrientes de investigación.

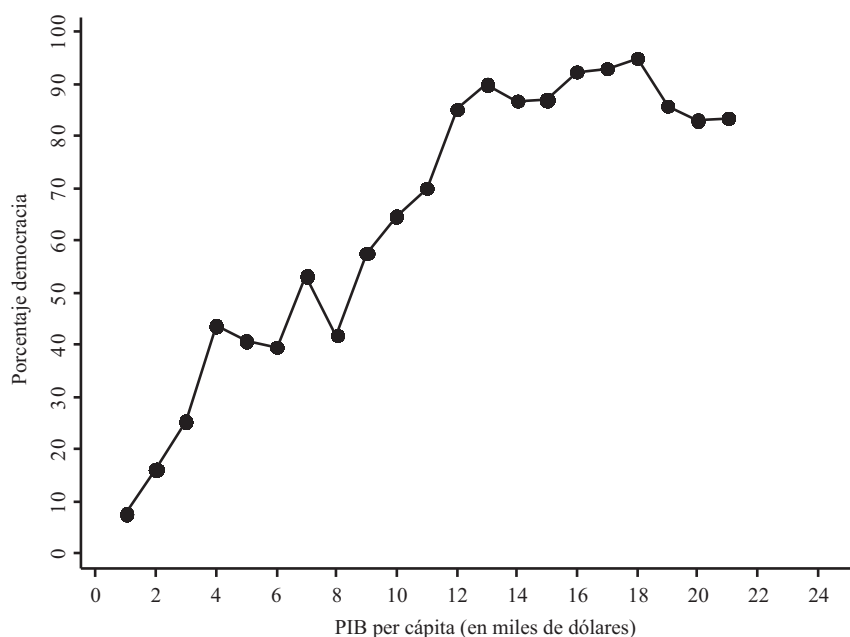
MODERNIZACIÓN Y DEMOCRACIA

Lipset, en su tan citado artículo de 1959, plantea la tesis de que las condiciones estructurales de la sociedad desempeñan un papel crucial en la fortaleza de las instituciones democráticas. En concreto, sugiere que la estabilidad democrática depende, esencialmente, del nivel de riqueza de los países, de manera que, en palabras de Lipset, «cuanto más próspera es una nación, mayor es la probabilidad de que mantenga la democracia» (1959: 75). Me-

(3) Para una revisión en detalle de este debate, véase Rueschemeyer *et al.* (1992). En el capítulo introductorio de Boix (2003), se exponen de manera concisa, pero bien estructurada, las principales contribuciones del debate sobre la democratización.

dian­te una comparación entre algunos países de Europa y de América Lati­na, Lipset observa que las democracias europeas más estables suelen tener, como promedio, un ingreso per cápita, un grado de industrialización y urba­nización, y un nivel educativo más alto que las dictaduras occidentales y latinoamericanas. La fortaleza de esta asociación entre desarrollo económico y democracia, que sucesivos análisis empíricos han demostrado (4), constitu­ye el hallazgo central sobre el que se asienta el enfoque de la modernización. A modo de ilustración, el Gráfico 1 exhibe la relación entre el PIB per cápita (indicador del nivel de prosperidad económica) y el porcentaje de regímenes democráticos para una muestra mundial de países en el período 1960-1996.

GRÁFICO 1. *Desarrollo económico y democracia (5)*



(4) Véase, por ejemplo, Bollen (1979), Burkhart y Lewis-Beck (1994), y Przeworski y Limongi (1997).

(5) Este gráfico incluye todos los casos —países y años desde 1960 a 1996— para los que hay información acerca de su régimen político (utilizando los datos de Przeworski *et al.* 2000) y su renta per cápita (usando la base de datos de Heston y Summers, *Penn World Table* 2002).

Como indica este gráfico, de acuerdo con la hipótesis de Lipset, la proporción de democracias aumenta a medida que se incrementa el grado de desarrollo económico de los países.

Una de las explicaciones formuladas por el propio Lipset para dar cuenta de esta relación es que los procesos de desarrollo e industrialización conllevan un aumento paralelo de los niveles educativos de la población. Una población mejor educada, a su vez, desarrolla un tipo de visión más compatible culturalmente con las prácticas democráticas. La educación genera un cambio de valores individuales en concordancia con actitudes más democráticas, tales como un mayor nivel de tolerancia hacia las distintas opiniones políticas y una menor disposición hacia el extremismo político (6). Una segunda explicación, relacionada, en parte, con la anterior tiene que ver con las transformaciones en la estructura de clase que impulsa la modernización económica. El progreso y el incremento de la riqueza reducen, según Lipset, la desigualdad económica, de tal forma que, las clases trabajadoras, al mejorar sus condiciones sociales, moderan sus reivindicaciones políticas y adoptan posturas de reforma más graduales. Además, el progreso económico incrementa el tamaño relativo de la clase media, lo cual atenúa el nivel de conflicto en la sociedad dado que esta clase es un agente de moderación en contra de las facciones políticas más extremas. Como resultado de esta reducción del extremismo y del conflicto político, las posibilidades de consolidación democrática incrementan y disminuyen las probabilidades de éxito de las opciones autoritarias.

Otros estudios, inspirados en las ideas de Lipset pero más propiamente encuadrados dentro del enfoque de la modernización, ofrecieron luego propuestas de corte funcionalista para explicar el predominio de las democracias en los países más avanzados. El argumento general de este enfoque interpreta esta relación como el resultado de un equilibrio funcional entre las instituciones democráticas y la creciente complejidad de las sociedades modernas. El desarrollo y la modernización de las estructuras económicas traen consigo una diferenciación y división del trabajo cada vez más profundas que, acompañadas de los cambios tecnológicos y de la proliferación de orga-

(6) Existen razones teóricas que, sin embargo, ponen en cuestión la hipótesis cultural que vincula la educación con el avance de valores democráticos. Por ejemplo, Lott (1999) sugiere que la educación pública puede servir a los intereses de los gobernantes totalitarios como instrumento de adoctrinamiento en sus estrategias para controlar la oposición. Los dictadores pueden usar los colegios bajo control estatal para difundir una ideología de apoyo al régimen. Es más, Lott descubre, mediante distintas pruebas estadísticas que, en los niveles más altos de totalitarismo, el adoctrinamiento constituye un medio más barato, si lo comparamos con la represión, para contener la disidencia.

nizaciones autónomas y horizontales, requieren de instituciones políticas más complejas y especializadas para el buen funcionamiento de la sociedad (Cutright 1963). Según la teoría de la modernización, las instituciones representativas de la democracia constituyen la forma de gobierno que demanda una sociedad pluralista y heterogénea. Al conectar causalmente la riqueza de los países con la emergencia de los sistemas democráticos, Przeworski *et al.* (2000) denominan a esta teoría la tesis *endógena* de la asociación entre desarrollo y democracia.

Durante la década de 1970 y 1980, el enfoque de la modernización fue muy puesto en cuestión, e incluso rechazado frecuentemente como explicación de las transiciones democráticas por su carácter determinista y por la ausencia de micro-fundamentos políticos que pudieran establecer la secuencia causal desde el progreso hacia el cambio democrático. En efecto, según este enfoque, como acabamos de ver, los países, condicionados por sus estructuras económicas, o bien transitan de manera directa hacia un régimen democrático, o bien se ven condenados a formas de poder autoritarias. En otras palabras, los sistemas políticos emergen, de forma inevitable, como consecuencia de las condiciones socioeconómicas predominantes en la sociedad. No existe ningún factor político que mediatice el resultado institucional del desarrollo, ni se atribuye ningún papel a las estrategias e interacciones de las fuerzas políticas o actores sociales implicados en el proceso de democratización. Como, en última instancia, son los gobernantes y líderes de los grupos políticos los que llevan a cabo tal proceso, de ahí la crítica bien acertada de que la tesis de la modernización es inapropiada debido a su carácter apolítico y a la falta de fundamentos a nivel micro vinculados a la acción política.

En total oposición a esta tesis, el debate sobre los orígenes y la estabilidad democrática toma un rumbo bastante distinto centrando su atención en los actores relevantes involucrados, en sus preferencias y acciones. Esta nueva línea de investigación, iniciada por Rustow (1970), pero consolidada por los trabajos de O'Donnell y Schmitter (1986) y Przeworski (1991), contempla la emergencia de la democracia como un resultado no necesario de las estrategias de las elites rivales a favor y en contra de las instituciones democráticas. Actuando en un vacío social y desprovistos de intereses asociados a la clase o a otro tipo de *cleavage* social, los actores implicados definen sus estrategias atendiendo a sus preferencias institucionales, que son asignadas arbitrariamente por los propios académicos, y a las acciones de los otros agentes en un contexto de incertidumbre. La democracia, según la conclusión general a la que llegan estos estudios, surge como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre los reformistas procedentes de la dictadura establecida y los grupos menos radicales de la oposición al régimen.

Przeworski (1991) da un paso adelante en la justificación de estas proposiciones introduciendo la teoría juegos en este tipo de análisis. Una de las formalizaciones que ajusta a la situación consiste, básicamente, en un juego entre dos grupos de defensores del régimen autoritario —moderados y partidarios de la línea dura— y dos tipos de oposición —reformistas y radicales. Influida por los trabajos previos de esta perspectiva académica, Przeworski parte de la idea de que la transición a una democracia plena («con garantías») es factible sólo si se logra un acuerdo entre los moderados del bloque autoritario y los reformistas del frente opositor. Al examinar las condiciones de posibilidad de dicho acuerdo, el autor argumenta, sin embargo, que la estrategia de democratización es inconsistente y, en consecuencia, afirma que es difícil obtener predicciones acerca de los contextos que favorecen el éxito de los procesos democratizadores. En el libro que aquí se reseña de Przeworski *et al.* (2000), se defiende de nuevo la idea de que el desenlace de la situación estratégica que caracteriza las negociaciones sobre el tipo de régimen es incierto e impredecible. Según sus propias palabras: «Cuando se examinan a nivel micro los conflictos acerca de los regímenes, explorando los actores políticos involucrados, sus motivaciones y sus creencias, resulta evidente que estas situaciones están repletas de incertidumbre (...). Los análisis de teoría de juegos acerca de las transiciones a la democracia demuestran que los actores implicados no conocen a menudo las preferencias de cada uno, las relaciones de fuerza bruta, o los resultados de los posibles conflictos (...). Y, bajo tales condiciones, pueden prevalecer distintos equilibrios: si bien la transición a la democracia es un resultado factible, también lo es la perpetuación del status quo dictatorial, o incluso una solidificación de la dictadura» (Przeworski *et al.* 2000: 97).

El objetivo primordial del libro *Democracy and Development* de Przeworski *et al.* (2000) es estimar en qué medida el tipo de régimen político tiene consecuencias para el crecimiento económico. Mediante múltiples pruebas estadísticas, abarcando distintos métodos de estimación y utilizando datos de panel para una muestra mundial de países observados desde 1950 a 1990, los autores examinan el efecto del régimen sobre el crecimiento del ingreso total y sus mecanismos, es decir, el producto por trabajador, la inversión, la fuerza del trabajo y la distribución funcional del ingreso. Además, exploran empíricamente la proposición, formulada de manera reiterada en la literatura especializada, de que la inestabilidad política inhibe el crecimiento económico. Esta hipótesis es puesta a prueba por separado para las dictaduras y las democracias. El último capítulo lo dedican a estudiar los efectos del régimen político sobre el crecimiento demográfico al ser éste un factor determinante de los incrementos de la renta media, indicador central del bie-

nestar general de la sociedad. De toda la evidencia empírica que aportan sobre estas cuestiones, cabría destacar la siguiente: si bien no hay diferencia entre los dos tipos de instituciones —autoritarias o democráticas— respecto a sus tasas de crecimiento, sí que se observa una divergencia en cuanto a las formas o trayectorias de su desarrollo económico. Mientras que el crecimiento económico de las democracias descansa, esencialmente, en la productividad del trabajo y en el progreso tecnológico, las dictaduras suelen crecer mediante incrementos del total de la fuerza de trabajo y de las tasas de inversión en capital físico.

Este ambicioso estudio empírico sobre las consecuencias económicas del sistema político logra, de manera rigurosa, dar respuesta a preguntas no resueltas en el debate acerca del impacto del tipo de régimen en el crecimiento económico (7). De hecho es ya una referencia imprescindible de la literatura relevante que, hasta ese momento, había obtenido resultados contradictorios pese a la ingente producción de análisis estadísticos.

Parte de la credibilidad de sus hallazgos empíricos proviene de la utilización novedosa de modelos de selección en el examen econométrico, incorporando la dinámica de selección del régimen político en las ecuaciones que estiman las repercusiones de éste en los indicadores económicos anteriormente citados. Esto, sin duda, constituye un acierto, dado que hay razones para pensar que algunos factores que impulsan la instauración de un tipo de escenario institucional u otro podrían estar influyendo, a la vez, en las tasas de crecimiento de los países. Para aislar el efecto del régimen político y poder así obtener estimaciones no sesgadas, los autores primero desentrañan empíricamente las dinámicas socioeconómicas y políticas que dan cuenta de la distribución observada de los sistemas políticos en el mundo desde 1950 a 1990. De este modo, y a propósito de los objetivos del presente artículo de revisión, este libro supone también una contribución decisiva a la discusión académica, aún no zanjada, sobre las causas del cambio institucional y de las transiciones democráticas.

Antes de proceder al análisis de las variables y de los mecanismos que determinan la existencia de regímenes democráticos, los autores dedican el primer capítulo del libro a definir el régimen político y a justificar las reglas utilizadas para clasificar como autoritarios o democráticos los regímenes observados. La clasificación que proponen se basa en el principio de la competencia política y en la existencia de votaciones populares para la elección del jefe de gobierno y de la asamblea legislativa. En concreto, un régimen es co-

(7) Para una revisión de este debate, véase Przeworski y Limongi (1993), Sirowy y Inkeles (1990) y Maravall (1997).

dificado como democracia si (1) el ejecutivo es elegido, directa o indirectamente, en elecciones populares y es responsable directamente ante los votantes o ante un legislativo elegido por éstos; y si (2) el legislativo es también elegido y existe más de un partido (Przeworski *et al.* 2000: 19-20). Todos los casos que no reúnen estas condiciones son considerados dictaduras. Respecto a otras clasificaciones existentes, la principal mejora que introduce esta base de datos, aparte de disponer de una cobertura más extensa, es que está basada en hechos objetivos y no en evaluaciones subjetivas de especialistas, como ha sido la norma en la mayoría de los esfuerzos empíricos de codificación del régimen político. Es por ello que la serie de datos generados por estos autores constituye una de las bases más utilizadas en los estudios empíricos relacionados, de un modo u otro, con las instituciones políticas.

Equipados con esta nueva categorización dicotómica del régimen político, Przeworski *et al.* (2000) proceden al examen estadístico de los factores asociados a la probabilidad de encontrarnos con democracias o dictaduras. Para empezar, se corrobora, una vez más, la existencia de una fuerte relación entre el desarrollo económico (usando el ingreso per cápita como indicador) y la frecuencia de instituciones democráticas — esta relación se ha mostrado con datos descriptivos en el Gráfico 1—. Más aún, incluyendo otras variables sociopolíticas en el modelo econométrico como, por ejemplo, la herencia colonial de los países, el número de transiciones anteriores hacia el autoritarismo, la religión dominante en la sociedad o la división etnolingüística de la población, se detecta que el desarrollo económico es la variable que mejor predice el régimen político. Así pues, el patrón ya observado por Lipset de que las democracias suelen concentrarse en países ricos y las dictaduras en países más pobres se reafirma, esta vez mediante un análisis más riguroso controlando los posibles efectos de otros factores de corte político y social.

Las siguientes pruebas estadísticas que realizan los autores tienen como objetivo mostrar los mecanismos que subyacen tras este patrón. Quizá ésta sea la contribución empírica más importante que se haya hecho hasta la fecha sobre la relación existente entre desarrollo y democracia (8). Para Przeworski *et al.* (2000), la existencia de regímenes democráticos puede estar relacionada con el nivel de renta per cápita bien porque (1) conforme la economía crece, es más probable que las naciones transiten hacia la democracia, o bien porque (2) la probabilidad de supervivencia de la democracia aumenta con el desarrollo económico. El primer mecanismo es el que se subraya en la

(8) Ciertamente, en Przeworski y Limongi (1997), ya se exponen, aunque de forma resumida, las líneas centrales y los resultados más destacados de esta contribución.

teoría de la modernización de acuerdo con la cual, según hemos visto, la democracia es *endógena* al desarrollo económico porque es un producto del mismo. Como afirman los autores, la secuencia causal del argumento de la modernización parte de países autoritarios pobres que, cuando han alcanzado un cierto umbral de progreso socio-económico, instauran un sistema democrático.

Este razonamiento tiene varias implicaciones empíricas. En primer lugar, deberíamos observar que la quiebra de las dictaduras y, por ende, las transiciones a la democracia son más probables en los niveles de renta per cápita más altos. La evidencia empírica, derivada de la aplicación de un modelo probit dinámico (9), muestra que esta hipótesis no se confirma. Lo que se deriva de los datos es que las dictaduras suelen ser menos estables en los intervalos intermedios de desarrollo económico que en los países pobres o en los países ricos. Interpretado desde la perspectiva de la transición democrática, este patrón nos indica que la probabilidad de instauración de una democracia es relativamente pequeña en sociedades con escasos recursos —con un nivel de renta per cápita inferior a los 1000 dólares—, aumenta a medida que la economía crece, pero, a partir de cierto nivel de riqueza —7.000 dólares—, dicha probabilidad tiende a decaer. La segunda implicación empírica de la teoría de la modernización es que, según Przeworski *et al.* (2000), para que esta teoría tenga capacidad de predicción deberíamos poder identificar un umbral de desarrollo a partir del cual sea seguro que las dictaduras quiebran. Nuevamente, la evidencia es inconsistente con esta proposición: los regímenes autoritarios se mantienen estables en un rango de ingreso muy amplio y no es posible predecir a qué nivel de desarrollo estos regímenes transitarán hacia un contexto institucional democrático. La conclusión de este análisis es, en palabras de los autores, que «el grado de desarrollo, al menos medido por el ingreso per cápita, ofrece poca información sobre las oportunidades de transición a la democracia» (pág. 98).

Si la riqueza de la economía no parece condicionar el cambio democrático de régimen, entonces ¿por qué la existencia de democracias está tan fuertemente asociada a la prosperidad económica como sugieren los datos? La razón reside, según los autores, en el impacto del desarrollo sobre la *estabilidad* democrática —el segundo mecanismo mencionado arriba. Supongamos que, efectivamente, la probabilidad de supervivencia de la democracia es mayor en los países más ricos. Si, por los motivos que sean, las dictaduras sucumben en cualquier intervalo de renta, cada vez que esto ocurra «en un

(9) Este modelo permite a los autores estimar por separado la probabilidad de transitar de un régimen a otro de la probabilidad de permanencia en el mismo régimen político.

país rico la democracia surgirá para quedarse» y, de este modo, «la historia debería ir acumulando gradualmente democracias ricas» (pág. 90). Las pruebas empíricas que aportan los autores al respecto son bastante concluyentes: la esperanza de vida de un régimen democrático se alarga significativamente con el valor del ingreso per cápita. De hecho, cuando la renta media está por encima de 4.000 dólares, la probabilidad de que una democracia quiebre es casi nula (10).

En resumen, Przeworski *et al.* (2000) concluyen que «mientras el desarrollo económico bajo dictadura se relaciona, en el mejor de los casos, de manera no lineal con la emergencia de las democracias, una vez que éstas están establecidas, es mucho más probable que perduren en países más altamente desarrollados» (pág. 103) (11).

LAS BASES SOCIALES DE LOS REGÍMENES POLÍTICOS

La línea de investigación iniciada por Moore en la década de 1960 conecta los sistemas políticos a la estructura social de clase y, a diferencia de la teoría de la modernización, enfatiza el papel de los actores o fuerzas sociales (identificadas con las clases) en la instauración de los diversos regímenes políticos. Según la versión original de este enfoque, las condiciones contemporáneas de la sociedad, como el nivel de desarrollo económico alcanzado, no ejercen ningún efecto causal sobre las oportunidades actuales de establecimiento de un sistema democrático. Más bien, para identificar los orígenes

(10) En el libro no se ofrece ningún argumento, más allá de la tesis de Lipset basada en la educación, que aclare por qué el progreso económico incrementa la supervivencia de las democracias. Esto lo hace posteriormente Przeworski en su artículo de 2005 «Democracy as an Equilibrium».

(11) Aunque éste es el hallazgo, a mi juicio, más relevante del capítulo concerniente a los determinantes del régimen político del libro de Przeworski *et al.* (2000), merece la pena mencionar algunos otros resultados empíricos de este capítulo. Primero, los autores sugieren que las crisis económicas afectan negativamente a la estabilidad democrática, pero solo en naciones poco desarrolladas, mientras que no tienen ningún impacto en la quiebra de las dictaduras. Segundo, de todas las variables políticas introducidas en el análisis y enumeradas arriba, los cambios precedentes de régimen es el factor político que más influye en la estabilidad de ambos regímenes —la evidencia apunta hacia un impacto negativo que es mucho más fuerte en el caso de las democracias. Por último, los autores examinan en qué medida la configuración institucional de los regímenes democráticos —presidenciales o parlamentarios— tiene que ver con la supervivencia de las democracias. Según la evidencia empírica, las democracias presidencialistas duran menos que los regímenes parlamentarios bajo cualquier condición política y económica.

y las causas de la democracia moderna, habría que remontarse a las condiciones estructurales históricas de los países relacionadas con la organización de las clases rurales y sus conexiones con los intereses comerciales emplazados en las ciudades. Para Moore, los efectos a largo plazo de los conflictos históricos entre las clases son decisivos en la explicación de los cursos políticos que siguen posteriormente las naciones, incluso siglos después. Precisamente en este determinismo histórico reside la debilidad del trabajo de Moore que, por otra parte y con razón, ha alimentado numerosas críticas lanzadas contra el enfoque de las bases sociales de los regímenes políticos.

Mediante un estudio histórico comparado de varios países —Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, China y la India— Moore interpreta los tres «caminos hacia el mundo moderno» (democracia, fascismo y comunismo) como el resultado del equilibrio de fuerzas entre los grupos de las comunidades agrarias y la fortaleza de la burguesía. Así, por ejemplo y de manera esquemática, la trayectoria hacia la democracia moderna, seguida paradigmáticamente por Inglaterra, arranca cuando la aristocracia terrateniente consigue cierta independencia con respecto a la monarquía y, lo que es más importante, introduce prácticas comerciales en la producción agrícola. La eliminación de las estructuras feudales de servidumbre produjo el efecto positivo de liberar al campesinado, abonando de esta forma el camino hacia el capitalismo y la consolidación del mercado como mecanismo de transacción de la fuerza de trabajo. Paralelamente, la penetración de los métodos capitalistas de producción en el campo favoreció la convergencia de intereses entre los grandes terratenientes y la burguesía dominante en las ciudades, contra los abusos autoritarios de la monarquía absoluta y a favor de la instauración de las instituciones del gobierno representativo. En las sociedades que siguieron la ruta hacia el comunismo o el fascismo, las clases terratenientes, lejos de adoptar los modos comerciales de la industria, intensificaron los sistemas represivos del trabajo y para ello se aliaron en ocasiones con la burocracia del estado. Esto generó, en ciertos contextos, una respuesta revolucionaria exitosa por parte del campesinado.

El enfoque de las bases sociales de la democracia fue utilizado más tarde por Lubbert (1991) para explicar la evolución de los sistemas democráticos europeos durante el período de entreguerras. Pero la contribución contemporánea más influyente de esta perspectiva es la de Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992) que, usando el método comparado de casos, enfatiza el papel de las clases trabajadoras en el impulso de las transiciones a la democracia. Cuando el poder político de los grupos de menores ingresos es mayor, lo cual está asociado con un desarrollo capitalista más alto, es más probable la emergencia de un régimen democrático. En esta explicación, las preferen-

cias de las clases sociales sobre el tipo de régimen están determinadas de manera exógena y son inamovibles ante cualquier cambio de las condiciones políticas, sociales o económicas. Los beneficios asociados a la democracia —es decir, al incremento de la igualdad política de acuerdo con los autores— constituyen la base esencial de la formación de las preferencias de los grupos sociales. En tanto que los grandes propietarios de la tierra se han opuesto sistemáticamente a la democracia, las clases trabajadoras aglutinan la fuerza social más relevante a favor del sistema democrático (12). Dadas estas preferencias, los regímenes políticos son explicados, a mi entender abusivamente, en función de la relación de poder de los grupos en conflicto que depende, a su vez, de las estructuras económicas. Para estos autores, el desarrollo capitalista, al incrementar el tamaño y la densidad organizativa de las clases trabajadoras y debilitar a la clase terrateniente, promueve el avance de la democracia. Así pues, esta teoría da contenido social a la correlación tan persistente que existe entre el desarrollo económico y la existencia de democracias, ofreciendo mecanismos teóricos basados en la clase.

El libro de Tatu Vanhanen (2003) está relacionado, indirectamente, con esta escuela de investigación ya que acentúa la importancia de la distribución de poder entre los grupos —aunque no identifica cuáles son— en la explicación de las transiciones democráticas. Partiendo de la teoría darwiniana de la selección natural, Vanhanen mantiene sus posiciones teóricas ya expuestas en sus primeros trabajos de finales de los setenta según las cuales cuando los recursos de poder están distribuidos de manera igualitaria entre varios grupos, es de esperar que el poder político también esté distribuido más equitativamente de forma que la democracia tenga lugar. Los recursos asociados al poder que el autor analiza son de carácter económico y cognitivo medidos, de forma cuestionable, con indicadores como el porcentaje de estudiantes en las universidades, el de población alfabetizada o la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra. El autor, aparte de no explicitar a qué grupos se refiere, no establece ninguna conexión analítica entre la asignación de recursos y el poder político de los sectores sociales rivales.

El análisis empírico, un tanto incompleto, que lleva a cabo Vanhanen se basa en correlaciones y regresiones simples sobre una muestra de 170 países observados en 1999-2000, por un lado, y sobre datos históricos (1850-1998) para un número más limitado de países, por otro. Aunque los resultados empíricos concuerdan, por lo general, con sus principales hipótesis, lo cierto es

(12) El papel del resto de clases en los procesos de democratización es ambivalente —como en el caso de la burguesía— o secundario en forma de potencial aliado de los trabajadores —como las clases medias o la pequeña burguesía rural y urbana.

que son consistentes también con otras teorías alternativas que de hecho se han ofrecido ya en la literatura. Por ejemplo, la correlación positiva entre la igualdad en los recursos cognitivos (es decir, porcentaje de población alfabetizada y universitaria) y la democratización es perfectamente compatible con la versión educativa de la teoría de la modernización: un incremento de la educación promueve un cambio de valores culturales más próximos a actitudes democráticas. La existencia de hipótesis rivales, que pueden justificar las relaciones empíricas que encuentra Vanhanen, debilita la validez empírica de sus argumentos teóricos. A mi juicio, el principal mérito del libro es la cantidad de información cuantitativa que aporta sobre la distribución de la tierra medida como el porcentaje del total de la propiedad privada de la tierra en manos de unidades familiares agrícolas.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS DE CLASE
Y CONDICIONES DE DEMOCRATIZACIÓN

Recientemente, la democratización y, en general, la elección del régimen político ha sido objeto de investigación desde la economía política (Boix 2003; Acemoglu y Robinson 2006). Estos estudios tratan de entender las dinámicas que dan lugar a la democracia a través del análisis de modelos formales, con distintos grados de sofisticación, en que se especifica cuáles son los actores relevantes del proceso de creación institucional, así como sus preferencias y recursos políticos. Los individuos, en su búsqueda por maximizar sus ingresos y su bienestar material, definen sus opciones ideales en torno al régimen en función de las consecuencias fundamentalmente económicas de las instituciones políticas. Las preferencias institucionales de los agentes están determinadas, pues, por sus posiciones económicas y por las implicaciones distributivas de las instituciones. Así, en estos modelos, los actores políticos relevantes, enfrentados por el tipo de régimen, corresponden a las clases sociales. Si bien Acemoglu y Robinson hablan de la existencia de una elite que, a priori, no está asociada a ninguna característica o *cleavage* social, sin embargo, los autores se centran casi en exclusiva en modelos en los que la elite es identificada con los grupos más ricos de la sociedad.

Como las consecuencias del régimen sobre el bienestar de los grupos varían según ciertas condiciones —principalmente la desigualdad económica y el grado de especificidad del capital (13)—, los agentes de estos modelos

(13) La especificidad del capital hace referencia a la dificultad de los propietarios del mismo para trasladar sus recursos de un país a otro. Por ejemplo, mientras que la tierra es un

ajustan sus preferencias por el régimen de acuerdo con tales factores contextuales. Dadas estas condiciones y, por ende, una estructura determinada de preferencias, los grupos deciden sus estrategias atendiendo a la distribución relativa de los recursos de poder y las acciones de los otros. De la interacción estratégica de las clases sociales, se derivan de los modelos distintos equilibrios políticos que caracterizan la elección del régimen político.

Si bien los trabajos de Boix (2003) y de Acemoglu y Robinson (2006) están influidos por las distintas corrientes de investigación analizadas hasta ahora, suponen un avance significativo en la generación de mecanismos causales y predicciones falsables, unificando diversos aspectos de tales corrientes. En primer lugar, los dos libros parten de la teoría de juegos, que entiende el proceso democrático como un juego estratégico entre actores con distintos intereses. Al igual que para la teoría de la democracia como equilibrio político (O'Donnell y Schmitter 1986; Przeworski 1991), para Boix, Acemoglu y Robinson, los mecanismos de la democratización no se pueden entender sin especificar a los actores políticos principales, sus motivaciones y creencias. Sin embargo, estos autores, a diferencia de los anteriores trabajos de teoría de juegos, caracterizan socialmente a los agentes relevantes del proceso y formalizan sus funciones de utilidad, lo cual les permite generar predicciones acerca de las condiciones favorables de la democratización: por ejemplo, en qué medida la desigualdad económica impide que los países transiten hacia formas más democráticas de gobierno. En segundo lugar, las aportaciones de Boix (2003) y de Acemoglu y Robinson (2006) heredan de la tradición de las bases sociales de la democracia la visión de que los intereses materiales de los individuos definen sus posiciones en cuanto al sistema político y, en concreto, heredan la idea de que las clases sociales constituyen los principales actores de la selección del régimen. No obstante, en contra de esta tradición, los autores estiman que las opciones ideales de las clases no son inamovibles ni son independientes a las condiciones del contexto. Por último, dichas aportaciones, como veremos, fundamentan a nivel micro la tesis de la modernización al establecer los vínculos analíticos de la relación entre desarrollo económico y democracia.

De manera simplificada, la estructura del modelo básico de Boix (2003) parte de la existencia de dos tipos de individuos diferenciados únicamente por sus ingresos: los pobres —que constituyen la mayoría de la población— y los ricos. Hay tres tipos de régimen político: las democracias, las dictaduras de derechas y las dictaduras de izquierdas. En democracia, las políticas se deci-

bien muy específico de la economía, el capital financiero o humano son activos más fáciles de transferir sin perder mucha productividad.

den colectivamente por la regla de la mayoría, de forma que los pobres, al ser mayoría, son los que controlan el poder de decisión. Éstos tienen que decidir qué tamaño de redistribución del ingreso imponer, teniendo en cuenta su bienestar material. El nivel óptimo de redistribución está determinado por dos parámetros fundamentales: el grado de desigualdad económica y el nivel de especificidad de los recursos o del capital de la economía. Obviamente, cuanto mayores son las diferencias económicas entre los ricos y los pobres, éstos desearán incrementar aún más la redistribución. En cuanto a la especificidad de los recursos, cuanto menor es la naturaleza específica de los bienes de la economía y, por tanto, más fácil resulta la transferencia de bienes entre países, más disminuye el grado redistributivo de las políticas a fin de evitar que los propietarios del capital decidan llevarse sus activos a otras economías.

En las dictaduras de derechas, los ricos son los que deciden las políticas y, por tanto, no se lleva a cabo ninguna redistribución. Para excluir a los pobres del proceso político, la clase rica incurre en costes de represión que pueden ser altos o bajos en función de la relación de poder entre los grupos. Cuando, por ejemplo, los pobres han logrado superar sus problemas de acción colectiva y se han organizado en partidos políticos y sindicatos, crecen los costes de la represión para mantener el régimen dictatorial. En las dictaduras de izquierdas o comunistas, que se instauran a raíz de episodios revolucionarios exitosos, los pobres gobiernan y expropian toda la riqueza a la clase rica.

Sin entrar en los detalles del modelo, cuando la desigualdad o la especificidad de la riqueza del país es muy baja, la redistribución en democracia es lo suficientemente limitada que los ricos no tienen motivos para oponerse a la introducción de un régimen democrático (14). A niveles intermedios de desigualdad y especificidad de los recursos, al ser más altas las tasas impositivas en democracia, los sectores sociales con mayores ingresos cederán ante las presiones democráticas sólo cuando los costes de la represión sean altos. Sin embargo, conforme se incrementan aún más las diferencias económicas entre las clases y la naturaleza específica de los bienes, los ricos tendrán más incentivos para defender la dictadura evitando, así, una redistribución significativa de los recursos bajo democracia, incluso si los costes de excluir a los pobres del poder son altos. En ocasiones, esta estrategia de las clases poderosas será contestada por parte de las clases populares con acciones revolucionarias que, con una cierta probabilidad de éxito, conducirán al estableci-

(14) Ante la concesión de democracia, los pobres desisten de sus pretensiones revolucionarias ya que un supuesto clave de este modelo es que las clases con pocos recursos esperan siempre estar mejor bajo una democracia que bajo el sistema resultante de una revolución, y ello debido en parte a los costes de un conflicto abierto revolucionario.

miento de un régimen comunista. Así pues, cuanto más desigual es la distribución de la riqueza y más específicos son los bienes económicos, menor es la probabilidad de que se inicie un cambio institucional hacia la democracia.

A la luz de los equilibrios de este sencillo modelo (15), Boix procede a examinar varias regularidades empíricas detectadas en la literatura. Una de ellas es la relación entre desarrollo y democracia. Para Boix, el hecho de que los regímenes democráticos estén correlacionados con el nivel de desarrollo se debe a que el progreso y la modernización de la economía entrañan «un movimiento de bienes fijos y altamente inmóviles hacia un capital progresivamente más móvil, esto es, de sociedades dependientes de la explotación de las minas y la agricultura a economías basadas en las industrias manufactureras y en los negocios intensivos en capital humano» (pág. 41). La secuencia causal quedaría, por tanto, así: un mayor desarrollo aumenta la facilidad con la que los propietarios del capital pueden transferir sus activos a otras economías; esto llevaría a las clases populares a limitar la redistribución económica y, en consecuencia, los sectores con mayor riqueza de la población tendrán menores reticencias a conceder la democracia. El argumento de la especificidad de los bienes de la economía explicaría también, según Boix, la proposición formulada inicialmente por Moore de que los grandes propietarios de la tierra —sin ningún interés comercial en la industria— constituyen uno de los frentes antidemocráticos más potentes de la historia.

La parte empírica del libro está organizada en dos capítulos separados dedicados, por un lado, al estudio de caso de varias experiencias históricas y, por otro, al análisis cuantitativo de datos de panel desde 1850 a 1990. En general, la evidencia empírica tiende a confirmar las dos hipótesis centrales del modelo acerca de los efectos de la desigualdad y la especificidad del capital en la probabilidad de transición democrática.

El libro de Acemoglu y Robinson (2006) está dedicado a la formalización de las dinámicas de la estabilidad y transición democráticas. Es un libro puramente teórico en el que se analizan estas cuestiones con modelos formales altamente sofisticados. El argumento esencial de esta contribución arranca de una clasificación del régimen similar a la de Boix (2003). En democracia, los pobres son los que deciden las políticas y determinan el nivel de redistribución económica (16). En los regímenes no democráticos controlados por las elites,

(15) En otras partes del libro, Boix realiza varias extensiones del modelo incorporando al análisis la clase media, el crecimiento económico, la apertura comercial o las instituciones de los regímenes democráticos (el sistema electoral o la separación de poder).

(16) Ambos modelos utilizan el teorema del votante mediano para llegar al resultado de que los intereses de los pobres, al ser mayoría, son los que priman en la política democrática.

que Acemoglu y Robinson suelen identificar con las clases ricas, las amenazas de revolución por parte de los sectores excluidos imponen una serie de constricciones a las decisiones políticas de las elites. Ante estas amenazas, la primera opción disponible para los ricos es conceder medidas públicas favorables a los intereses de los pobres. Si esta estrategia no es suficiente para eliminar el peligro revolucionario, las elites podrían hacer promesas sobre la implementación de iguales medidas en el futuro. Sin embargo, estas promesas no son creíbles porque, cuando desaparezca el peligro de sublevación, las elites tendrán incentivos para no cumplirlas. Con el fin de hacer creíbles sus compromisos futuros de llevar a cabo políticas a favor de la mayoría, los ricos tienen que transferir el poder político a todos los ciudadanos. La democracia, pues, sirve en este modelo como garantía de cumplimiento de las promesas. De esta forma, y dado que el conflicto revolucionario entraña ciertos costes, la democratización logra evitar un posible levantamiento popular. Alternativamente, los ricos en lugar de conceder la democracia, podrían optar por la represión —y dejar en manos del azar la probabilidad de que los pobres lleven a cabo la revolución. La decisión de reprimir o democratizar el sistema político depende, fundamentalmente, en este modelo del nivel de desigualdad económica y de los costes de la represión.

Centrándonos aquí en la desigualdad económica (17), las predicciones de Acemoglu y Robinson (2006) acerca de los efectos de ésta en la democratización difieren en cierta medida de la hipótesis de Boix (2003). Una mayor dispersión de los recursos económicos, incrementa el riesgo de revolución al ser menos probable que los pobres se conformen con concesiones temporales y promesas políticas. En consecuencia, la probabilidad de democratización aumenta. Por otra parte, una distribución menos igualitaria, al generar una mayor redistribución en la política democrática, intensifica la oposición de las elites a abrir el proceso político. Teniendo en cuenta ambos mecanismos, la relación entre la desigualdad y la probabilidad de transición democrática tendría una forma de U invertida. En las sociedades muy igualitarias, la sublevación es menos atractiva para los pobres y sus demandas redistributivas pueden ser acomodadas más fácilmente con concesiones esporádicas por parte de las elites. Por tanto, en estas condiciones, la probabilidad de democratización es pequeña. En sociedades muy desiguales, se espera que los grupos con menores ingresos sí que exijan, bajo el chantaje revolucionario, arreglos institucionales democráticos para garantizar de manera permanente

(17) Los autores realizan numerosos ejercicios de estática comparada con respecto a otras condiciones como la naturaleza de los recursos económicos, la globalización, las crisis económicas, el diseño institucional de las democracias o el tamaño de la clase media.

políticas en beneficio de sus intereses. Sin embargo, las elites tienen mucho que perder si democratizan, dado que el tamaño de la redistribución bajo democracia será considerable en estas condiciones altas de desigualdad. Por ello, los ricos tendrán fuertes incentivos para llevar a cabo acciones represoras, especialmente cuando los costes de la represión son bajos, aún si ello conlleva el inicio incierto de la revolución. Así pues, las condiciones más favorables para la democratización deberían observarse en intervalos intermedios de la desigualdad donde, por un lado, las demandas de las clases con menores recursos no pueden ser satisfechas de forma temporal y, por otro lado, las elites no están tan dispuestas a recurrir a la represión para evitar la transición a la democracia.

En conclusión, para ambos trabajos, la elección de los varios regímenes políticos depende, fundamentalmente, de las consecuencias que éstos tienen en el bienestar de los grupos antagónicos. Al influir en la política redistributiva, las instituciones son, en sí mismas, objeto de conflicto entre las clases sociales. Sin embargo, las condiciones económicas —y, entre estas, particularmente la desigualdad— influyen sobre la intensidad de este conflicto y en la posibilidad de que haya ciertos márgenes para el acuerdo y la convergencia de intereses a favor de la instauración de la democracia.

Como se indicaba al principio de este artículo, y se ha demostrado en estas páginas, el debate sobre las causas de la democratización aún no está cerrado. Para algunos autores, como Przeworski *et al.* (2000), las transiciones democráticas son procesos difíciles de predecir al estar motivados por cuestiones tan poco sistemáticas y, por ende, generalizables, como el fracaso en una guerra, la muerte del dictador fundacional o la presión internacional. Para otros, sin embargo, como Boix (2003), Acemoglu y Robinson (2006), sí que es posible formular predicciones generalizables en tanto en cuanto las instituciones tienen implicaciones distributivas para los distintos grupos sociales y éstos actúan de manera racional teniendo en cuenta sus intereses materiales.

REFERENCIAS

- ACEMOGLU, DARON y JAMES A. ROBINSON (2006): *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*, New York: Cambridge University Press.
- BOIX, CARLES (2003): *Democracy and Redistribution*, Cambridge: Cambridge University Press.
- BOLLEN, KENNETH A. (1979): «Political Democracy and the Timing of Development», *American Sociological Review*, 44 (4): 572-87.
- BURKHART, ROSS E. y MICHAEL S. LEWIS-BECK (1994): «Comparative Democracy: The Economic Development Thesis», *American Political Science Review*, 88 (4): 903-10.

- CUTRIGHT, PHILLIPS (1963): «National Political Development: Measurement and Political Representation», *American Sociological Review*, 28 (2): 253-64.
- FREEDOM HOUSE (2006): *Freedom in the World*, New York: Freedom House.
- HESTON, ALAN y ROBERT SUMMERS (2002): *Penn World Table Version 6.1*, Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP), octubre.
- LIPSET, SEYMOUR M. (1959): «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy», *American Political Science Review*, 53 (1): 69-105.
- LOTT, JOHN (1999): «Public Schooling, Indoctrination, and Totalitarianism», *Journal of Political Economy*, 107 (6): S127-57.
- LUEBBERT, GREGORY M. (1991): *Liberalism, Fascism, or Social Democracy*, New York: Oxford University Press.
- MARAVALL, JOSÉ MARÍA (1997): *Regimes, Politics, and Markets: Democratization and Economic Change in Southern and Eastern Europe*, Oxford: Oxford University Press.
- MOORE, BARRINGTON (1966): *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Boston: Beacon Press.
- O'DONNELL, GUILLERMO y PHILIPPE C. SCHMITTER (1986): *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- PRZEWORSKI, ADAM (1991): *Democracy and the Market*, Cambridge: Cambridge University Press.
- PRZEWORSKI, ADAM (2005): «Democracy as an Equilibrium», *Public Choice*, 123 (3): 253-73.
- PRZEWORSKI, ADAM y FERNANDO LIMONGI (1993): «Political Regimes and Economic Growth», *Journal of Economic Perspectives*, 7 (3): 1002-37.
- PRZEWORSKI, ADAM y FERNANDO LIMONGI (1997): «Modernization: Theory and Facts», *World Politics*, 49 (2): 155-83.
- PRZEWORSKI, ADAM; MICHAEL E. ÁLVAREZ; JOSÉ ANTONIO CHEIBUB y FERNANDO LIMONGI (2000): *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990*, New York: Cambridge University Press.
- RUESCHEMEYER, DIETRICH; EVELYNE H. STEPHENS y JOHN D. STEPHENS (1992): *Capitalist Development and Democracy*, Chicago: University of Chicago Press.
- RUSTOW, DANKWART A. (1970): «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model», *Comparative Politics*, 2 (3): 337-64.
- SIROWY, LARRY y ALEX INKELES (1990): «The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review», *Studies in Comparative International Studies*, 25 (1): 126-57.
- VANHANEN, TATU (2003): *Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries*, London: Routledge.

Dulce Manzano